

Rol N° 1849-2021-CIV.-

MATERIA : (U15) Pesca y Acuicultura, infracciones a la ley de
DEMANDANTE : **SERNAP**
DEMANDADO : **RIVAS BUSTOS, JOSE**
Fecha de inicio : 18.11.2021
Fecha para Fallo : 05.01.2023

Arica, diecisiete de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En folio 1 comparece, Felipe Antonio Quintana Pasten, CI. N° 15.980.632-4, funcionario del **SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA**, Región de Arica y Parinacota, organismo de derecho público, ambos para estos efectos con domicilio en calle Serrano N° 1856, de la ciudad de Arica, denunciado a **JOSE NIEVES RIVAS BUSTOS**, CI. N° 06.335.482-1, con domicilio en pasaje Vista Hermosa s/n, Puerto Nuevo, Lota Bajo, Lota, Región del Biobío, por haber transgredido la normativa pesquera vigente, en particular artículos 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura en relación al artículo 116 del mismo cuerpo legal, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto Supremo N° 430, del año 1991; y Resolución Exenta N° 3115, de 12 de noviembre de 2013, que “Establece Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura”, solicitando la aplicación de la sanción que señala.

Fundando su denuncia señala que con fecha 12 de abril de 2021, alrededor de las 16:40 horas, el fiscalizador que denuncia en compañía del funcionario de la Armada de Chile, Felipe Villalobos, CI. N° 16.405.701-1, en una actividad de fiscalización en zona de pesca de la Región de Arica y Parinacota a bordo de la Patrullera ARCANGEL 4404, en el sector de Caleta Quiane, procedió a la inspección de la embarcación artesanal “NIÑA XIMENA”, matrícula 1865 – LOTA. Una vez a bordo, se identificó como funcionario fiscalizador de Sernapesca, solicitando al denunciado su registro pesquero artesanal (RPA), ante lo cual sólo presentó su cédula de identidad. El control realizado se documenta en planilla de fiscalización. Posteriormente, se inspecciona las bodegas de la embarcación, evidenciado recurso anchoveta en su interior. Finaliza la fiscalización a bordo.

En vista de que el denunciado no presentó RPA al momento de ser fiscalizado, se realizó la fiscalización documental en oficinas del Servicio, detectándose que el fiscalizado posee RPA N° 21474, en la categoría de pescador artesanal propiamente tal, activo, pero con oficina de inscripción en la ciudad de Coronel, Región del Biobío.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

Atendido que el hecho descrito precedentemente es constitutivo de infracción de la normativa pesquera, consistente en que el denunciado realizó faenas de pesca extractiva sin estar inscrito en el Registro Pesquero Artesanal de la Región de Arica y Parinacota, se procedió a cursar en su contra la Boleta de Citación y Notificación N° 0130969.

En lo que respecta a las labores de fiscalización que competen a los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, ellas encuentran su fundamento jurídico en lo que dispone el artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en relación al artículo 25 del D.F.L. N° 5 del año 1983, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 34 de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados.

Establece la primera de las disposiciones citadas que “La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, será ejercida por los funcionarios del Servicio y personal de la Armada y de Carabineros, según corresponda, a la jurisdicción de cada una de sus instituciones. En el ejercicio de la función fiscalizadora de la actividad pesquera, los funcionarios del Servicio y el personal de la Armada tendrán la calidad de Ministros de fe.” Agrega el artículo en comento, entre las facultades fiscalizadoras del Servicio, la de “inspeccionar y registrar... recintos, naves..., vehículos, contenedores, cajas, embalajes, envases o elementos que hayan servido para cometer las infracciones, tales como artes y aparejos de pesca...” (artículo 122, inciso 3°, letra a), de la Ley General de Pesca y Acuicultura).

Asimismo, los fiscalizadores del Servicio están facultados para “requerir y examinar toda la documentación que se relacione con la actividad pesquera extractiva... que se fiscaliza, tales como libros, cuentas, archivos, facturas, guías de despacho y órdenes de embarque” (artículo 122, inciso 3°, letra f) de la Ley General de Pesca y Acuicultura).

Por su parte, dispone el artículo 25 del D.F.L. N° 5, del año 1983, que “Corresponde en general al Servicio Nacional de Pesca ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento y, en general, velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos”. De esta manera, a los funcionarios fiscalizadores de Sernapesca no sólo les compete velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley, sino también de aquéllas que se establecen en los reglamentos respectivos sobre la materia.

Ahora bien, en lo que dice relación con la obligación que asiste a toda persona, incluidos los patrones de pesca, armadores pesqueros y tripulación, de dar cumplimiento a la normativa pesquera, y en especial, a los reglamentos que conforme a ella se dicten, ésta se encuentra consagrada expresamente en el artículo 1° de Ley en los siguientes términos: “A las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

disposiciones de esta Ley quedará sometida la preservación de los recursos hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura y de investigación, que se realice en aguas terrestres, playa de mar, aguas interiores, mar territorial o zona económica exclusiva de la República y en las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados internacionales.”.

Por su parte, el artículo 2° N° 1, de la ley define la actividad pesquera extractiva como aquella “actividad pesquera que tiene por objetivo capturar, cazar, segar o recolectar recursos hidrobiológicos...”, pudiendo ejercerse de distintas maneras, como es a través de la pesca recreativa, la pesca industrial o la pesca artesanal.

Esta última actividad se encuentra definida en el artículo 2° N° 28 de la ley como la “actividad pesquera extractiva realizadas por personas naturales que, en forma personal, directa y habitual, trabajan como pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal”, sin perjuicio que puedan participar de ellas personas jurídicas que cumplan con los requisitos legales. Agrega el inciso 3° de la norma en comento que “para los efectos de esta ley, la actividad pesquera artesanal se ejerce a través de una o más de las siguientes categorías: armador artesanal, pescador artesanal propiamente tal, buzo, recolector de orilla, alguero o buzo apnea”, entendiendo por pescador artesanal propiamente tal “aquel que se desempeña como patrón o tripulante en una embarcación artesanal, cualquiera sea su régimen de retribución.”.

Carácter regional del registro pesquero artesanal y normativa aplicable en caso de infracción.

Para efectos de comprender de manera acabada la regulación de acceso a la pesca artesanal, es necesario entregar un marco jurídico que explique brevemente el estatuto constitucional de la pesca y la forma en que se materializa dicha regulación en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

El fundamento constitucional de la actividad pesquera se encuentra en el artículo 19 N° 23 de nuestra carta fundamental, norma que asegura a todas las personas: “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así”, sin perjuicio de lo cual el constituyente admite por ley de quórum calificado y cuando lo exija el interés nacional puede establecerse limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de ciertos bienes.

Así las cosas, y por motivos de conservación y de uso sustentable de los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

recursos hidrobiológicos, la Ley General de Pesca y Acuicultura (ley de quorum calificado) dispone requisitos de acceso a los recursos hidrobiológicos, como contar con licencias transables de pesca o permisos extraordinarios de pesca para ejercer la pesca industrial y en el caso de la pesca artesanal, contar con una inscripción en el registro pesquero artesanal. En dicho contexto se inscriben los artículos 50, 50 A, 51 y 52 de la ley.

Como puede apreciarse, el derecho a la adquisición de ciertos bienes no es absoluto, como no lo es ningún derecho fundamental, admitiendo limitaciones.

Desde la perspectiva de la competencia del Estado para regular el acceso a los recursos hidrobiológicos, el artículo 1° A de la ley señala que: “Los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile en las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como a sus derechos de soberanía y jurisdicción en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental, de acuerdo a las normas de derecho internacional y a las de la presente ley.

En conformidad a la soberanía, a los derechos de soberanía y a su jurisdicción a que se alude en el inciso anterior, el Estado de Chile tiene el derecho de regular la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas existentes en todos los espacios marítimos antes mencionados.

De acuerdo con lo dispuesto en los incisos anteriores, el Estado de Chile podrá autorizar la exploración y explotación de los antes mencionados recursos hidrobiológicos existentes en los espacios referidos, sujeto a las disposiciones de esta ley.”.

En ese orden de ideas, el artículo 50 de la ley, señala en su inciso primero que: “El régimen de acceso a la explotación de los recursos hidrobiológicos para la pesca artesanal es el de libertad de pesca. No obstante, para ejercer actividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo que se configure alguna de las causales denegatorias del artículo 50 A.”.

De lo anterior, resulta claro que la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal es un requisito habilitante para poder ejercer la actividad extractiva, pero además de lo anterior, en cuanto requisito habilitante, la inscripción en el RPA tiene un contenido preciso que consiste en las pesquerías que se autorizan a cada pescador inscrito, en ese sentido el artículo 50, ya referido, se remite al artículo 50 A de la ley el cual señala en sus incisos primero y segundo que: “Se inscribirán en el Registro Artesanal las solicitudes de inscripción que recaigan sobre las pesquerías que se encuentran incorporadas en una nómina que determinará la Subsecretaría por



región. La Subsecretaría establecerá, mediante resolución, la nómina de pesquerías y las especies que la constituyen por región, el respectivo arte o aparejo de pesca y categoría de pescador artesanal que la puede extraer, y que conformarán el Registro Artesanal.”

De la norma antes transcrita, es claro concluir entonces que la inscripción en el RPA se otorga respecto de pesquerías definidas regionalmente, lo cual es del todo lógico si se tiene presente las características geográficas del país, puesto que las especies disponibles varían según el lugar en que se realice la actividad, pero también resulta lógico si se tiene en consideración que el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos (objetivo de la ley de acuerdo a su art. 1°), supone que la actividad se realice de manera equitativa, concluir lo contrario, esto es, que cualquier persona pueda realizar la actividad en cualquier parte del país, supondría que las regiones que cuenten con una mayor flota (y más tecnificada), realizarán la actividad en perjuicio de aquellas regiones en que la flota sea más precaria.

Asimismo, las pesquerías se determinan por categoría, lo que quiere decir que conforme a la ley, no da lo mismo quien ejerce la actividad, puesto que se determina además que tipo de pescador accede a cada pesquería. Una de esas categorías es el pescador artesanal propiamente tal, que conforme al artículo 2° numeral 28) letra b) es aquel que se desempeña como patrón o tripulante en una embarcación artesanal, cualquiera que sea su régimen de retribución.

En consecuencia, si el registro se lleva por región, las pesquerías son definidas por región y en ellas se incluye a las categorías dentro de las cuales se encuentran los tripulantes.

Si estos últimos están inscritos en el registro pesquero artesanal de otra región, transgreden la referida normativa pesquera y, como se señalará en esta presentación, dicha conducta se encuentra tipificada y sancionada en el artículo 116 de la ley.

Cabe agregar que la nómina a que hace referencia el art. 50 A de la ley, se encuentra contenida en la Resolución Exenta N° 3115, de 12 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que establece nómina nacional de pesquerías artesanales, que se acompaña en un otrosí de esta presentación y en la que es posible verificar que las pesquerías se establecen por región.

Este carácter regional del registro se ve reforzado en el segundo inciso del artículo 50 de la ley, dado que el esfuerzo pesquero varía de una región a otra, se le otorga a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la facultad de suspender transitoriamente la inscripción en el RPA en una o más regiones, de esta forma la norma indica que: “No obstante, con el fin de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

cautelar la preservación de los recursos hidrobiológicos cuando una o más especies hayan alcanzado un estado de plena explotación, la Subsecretaría, mediante resolución, previo informe técnico debidamente fundamentado del Consejo Zonal de Pesca que corresponda, podrá suspender transitoriamente por categoría de pescador artesanal y por pesquería, la inscripción en el registro artesanal en una o más regiones. En este caso, no se admitirán nuevas inscripciones de embarcaciones ni de personas para esa categoría y pesquería en la región respectiva. Mediante igual procedimiento se podrá dejar sin efecto la medida de suspensión establecida.”.

Además de lo señalado, los incisos 5°, 6° y 7° del art. 50 de la LGPA, contemplan expresamente un procedimiento excepcional para extender el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua, siempre y cuando se sometan a este procedimiento. En ese sentido los referidos incisos de la norma señalan que “Podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua, cuándo éstos realicen actividades pesqueras en las otras regiones.

Para establecer esta excepción, se deberá efectuar a través del procedimiento contemplado en los planes de manejo, con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados en la pesquería respectiva y que registren desembarques en los últimos tres años. En cualquier caso que se autorice, se deberá establecer la obligatoriedad del uso del sistema de posicionamiento satelital, con excepción de las embarcaciones inscritas en recursos bentónicos, y de certificación de capturas de las embarcaciones que operen.

Además, se podrán establecer restricciones de áreas de operación, número o tamaño de las embarcaciones.

Mediante igual procedimiento al señalado en el inciso anterior se podrá extender el área de operación de los pescadores artesanales a más de una región, tratándose de pesquerías de especies altamente migratorias y demersales de gran profundidad.”.

Como se podrá apreciar de la lectura de las normas precedentemente transcritas, para que el denunciado se encuentre habilitado para realizar faenas de pesca extractivas en la Región de Arica y Parinacota es requisito indispensable que se encuentre debidamente inscrito en el Registro Pesquero Artesanal de esta región, lo que no ha ocurrido en el caso de marras, de manera tal que él ha incurrido en una infracción a la ley debiendo ser sancionado por ello, según pasa a explicarse en los párrafos siguientes.

En cuanto a la figura infraccional y sanciones aplicables, es menester tener presente lo que dispone el artículo 116 de la ley, en relación a los artículos 50, 50 A, 51 y 52 del mismo cuerpo de normas y a la Resolución Exenta N° 3115 de 2013, analizados en los párrafos



anteriores.

En efecto, establece claramente el artículo 116 de la Ley que: “A las infracciones de las normas de la presente ley y sus reglamentos, o de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad, que no tuvieran prevista una sanción especial se les aplicará una multa equivalente a una o dos veces el resultado de la multiplicación del valor de sanción de la especie afectada, vigente a la fecha de la denuncia, por cada tonelada o fracción de tonelada, de peso físico de los recursos hidrobiológicos objeto de la infracción, y el comiso de las especies hidrobiológicas, de las artes o aparejos de pesca y medios de transporte, cuando corresponda. A las infracciones que no pudieren sancionarse conforme con lo dispuesto precedentemente, se les aplicará una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales.”

En folio 21, parte de la audiencia de folio 24, la defensa letrada del denunciado solicitó el rechazo de la pretensión punitiva del SERNAP sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho que efectúa.

Fundando si libelo señala:

1.- Inexistencia de infracción a la normativa pesquera.

Su parte no ha cometido infracción alguna a la ley de pesca, porque lo cierto es que no se configura ningún supuesto infraccional que amerite la sanción del mismo. Sumado al hecho que no ha realizado actividad pesquera extractiva alguna de manera personal, sino que solo se ha desempeñado como tripulante en una embarcación, cuyo armador habilitado, cuenta con todas las autorizaciones en regla para efectos del desarrollo de la actividad pesquera.

Que la compleja situación económica que atraviesa el país, derivada de diversos hechos, tanto sociales como sanitarios, ha motivado la movilidad de las personas a efectos de conseguir nuevas fuentes laborales y nuevas oportunidades. Lo anterior, no ha sido ajeno a la pesca artesanal, y a fin de encontrar mejoras en sus ingresos diversos tripulantes se han desplazado a zonas en las que existen mejores condiciones para el desarrollo de su oficio. En el escenario antes referido, diversos tripulantes de la zona sur se han desplazado a la zona norte de nuestro país, por la mayor oferta en plazas existentes en diversas embarcaciones artesanales, en especial, aquellas que realizan actividad extractiva sobre el recurso anchoveta, recurso este último destinado principalmente a la fabricación de harina de pescado y aceite. Así las cosas, con ocasión de la necesidad de los armadores de la zona de contar con personal calificado, se han concretado acuerdos que han supuesto el desarrollo de actividades pesqueras, por parte de pescadores que se han mudado, a fin de encontrar una fuente lícita para su sustento y el de su familia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

La realidad descrita corresponde al denunciado de autos, quien se desempeña como tripulante a bordo de la nave Niña Ximena, cuyo armador a efectos de concretar su actividad extractiva, se ha valido de los servicios de diversos tripulantes, ello en labores de apoyo.

Los tripulantes auxilian al armador, quien es el que tiene el título habilitante y la embarcación para desarrollar el esfuerzo pesquero.

Así las capturas corresponden al armador, quien se encarga de organizar los medios a efectos de concretar su actividad extractiva, siendo aquel el responsable frente a la autoridad pesquera en relación a las cargas y obligaciones que le empecen por realizar la explotación en comento.

Los tripulantes no realizan actividad pesquera extractiva alguna, ello es de cargo y riesgo del armador, quien es el que cuenta con los medios y las autorizaciones respectivas para efectos de proceder de forma legítima y regular a la extracción de recursos hidrobiológicos. Los tripulantes por si solos, no desarrollan actividad extractiva, pues carecen de una nave para realizar las capturas, no cuentan con artes de pesca idóneos para realizar tal tarea, y menos cuentan con título habilitante para efectos de proceder a la extracción, cuestión que corresponde al armador pesquero artesanal y su nave respectiva.

Que la denuncia tiene por finalidad inhibir el desarrollo de trabajo por parte del denunciado a bordo de naves pesqueras, toda vez que la autoridad ven en la referida actividad la comisión de un ilícito susceptible de sancionarse al alero de la Ley de Pesca y Acuicultura.

Como fundamento de dicho proceder, Sernapesca invoca el artículo 51 de la Ley de Pesca y Acuicultura, como la norma prohibitiva para efectos de desempeñarse como tripulante en naves, ello en región diversa a la que consta en su respectiva inscripción pesquera.

La referida disposición indica lo siguiente:

“Artículo 51.- Para inscribirse en el Registro Artesanal deberán cumplirse los siguientes requisitos: a).- Ser persona natural, chilena o extranjera con permanencia definitiva, o ser persona jurídica de conformidad con el artículo 2°, N° 28, de esta ley; b).- Haber obtenido el título o matrícula de la Autoridad Marítima que lo habilite para desempeñarse como tal. Este requisito no será aplicable a la categoría de recolector de orilla, alguero y buzo apnea; c).- Acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base en la cual se solicita la inscripción, y no encontrarse inscrito en otras regiones en el registro artesanal; d).- Los pescadores artesanales, para estar en el Registro, deberán acreditar residencia efectiva de al menos tres años consecutivos en la Región respectiva. Las notificaciones de todas las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

actuaciones que digan relación con la inscripción podrán ser practicadas en el domicilio acreditado de conformidad con la letra c).”

Valga destacar en este punto, que no se reprocha al denunciado el hecho de no contar con inscripción en el Registro Pesquero Artesanal a cargo del Servicio Nacional de Pesca, sino solo se le pretende inhibir de desarrollar su actividad en la región de Arica y Parinacota, por figurar en su inscripción pesquera en una región diversa.

Como segundo punto, es necesario dejar en claro que la referida norma, no contiene una prohibición para efectos de desempeñar una actividad y menos contiene un supuesto infraccional, que permita fundar el proceder de la denunciante. De hecho ninguna de las normas invocadas, ni menos el acto administrativo esgrimido como infringido, contienen un supuesto infraccional a excepción del extremadamente genérico artículo 116.

Que el indicado artículo 51, y que sería la infracción de sustancia y argumentada en el marco de la denuncia, sólo refiere los requisitos para inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal, cuestión a que el denunciado da cumplimiento en sus respectiva categoría, sin perjuicio que estima no se requiere estar inscrito en región correspondiente para efectos de desempeñarse como tripulante en naves pesqueras, debido a que los tripulantes, no desarrollan a título personal la actividad pesquera, por ende no requieren un título habilitante para efectos de desarrollar actividades extractivas, pues lo hacen por cuenta y riesgo del armador, quien si cuenta con su respectiva inscripción en el registro pesquero artesanal, en la región respectiva.

Es de recordar que en el sector pesquero artesanal, la inscripción en el registro pesquero artesanal constituye su título habilitante para efectos de ejercer la actividad pesquera extractiva, cuestión cuya titularidad empece en el caso de autos al armador, pues él es quien desarrolla la actividad extractiva, son ellos los que pueden proceder a realizar las faenas de pesca sobre los recursos a los cuales se encuentren autorizados. Si no concurren los tripulantes, el armador igualmente podría, en abstracto realizar las faenas extractivas, sin embargo requiere de personal que lo asista en tal labor, desde el punto de vista de la navegación, como desde la asistencia en las faenas extractivas propiamente tales.

A la inversa, no funciona, es decir, los tripulantes sin el armador no pueden en los hecho ni en derecho realizar faenas de pesca extractiva, pues no cuentan ni con los medios, ni con las habilitaciones del caso, y que son exigidas por la normativa pesquera.

La exigencia pretendida, podría tener algún sentido si se tratará de pescadores que pretendan desarrollar actividad extractiva pesquera a título personal, pero los tripulantes están destinados a servir en tareas a bordo de una embarcación que no es de su



propiedad, y respecto de un permiso de pesca que le corresponde al armador. Es más los tripulantes realizan su actividad a bordo, en mérito de una relación contractual con el armador, en cuyo mérito ellos obtienen una retribución por las labores pactadas. Algunos de ellos cumplen labores eminentemente técnicas, como lo son el capitán o patrón, el contraamaestre y el motorista, y que más bien se relacionan con tareas propias de la navegación que con las tareas de extracción pesquera. Por ello no resulta ajustado a derecho, ni a lógica, pretender que quienes desarrollan labores complementarias o de apoyo de la pesca extractiva desplegada por el armador artesanal, deban cumplir con exigencia prevista para pescadores que desarrollan a título personal la extracción, con cargo a un título habilitante de pesca propio.

Así, por lo expuesto, la denunciante pretende fundar su proceder fiscalizadorio en norma que no tiene el alcance pretendido, y menos contiene aquella una prohibición para efectos del desarrollo de una actividad lícita, esto es, desempeñarse como tripulante a bordo de una nave pesquera.

Que pretender un alcance como el descrito, supone un serio atentado a la libertad de trabajo, y se infringe gravemente el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, pues la autoridad administrativa pretende prohibir una clase de trabajo, sin que concurra causal constitucional, ni menos la habilitación legal previa a que se refiere la cita disposición constitucional.

En resumen, no cabe la exigencia de inscripción en el registro pesquero artesanal de la región, respecto de tripulantes que no ejercen actividad extractiva a título propio, sino que por cuenta, riesgo y encargo del armador, con quien tienen una relación laboral. Y aún en el evento de que se estime que ello es necesario, los tripulantes cuentan con inscripción en registro pesquero artesanal, el cual es uno, y se divide administrativamente o se forma por registros regionales, y luego por registros provinciales, luego con registros comunales y por localidad, ello en base a lo dispuesto en el inciso segundo de artículo 1 del Decreto 635 del Ministerio de Economía del año 1992 que crea el Registro Nacional de Pescadores Artesanales.

Con la interpretación dada por Sernapesca, se llegaría al absurdo que los pescadores solo podrían pescar en su comuna o localidad, pues los registros provinciales también están divididos en base a la referida unidad territorial.

Suma que tampoco refiere la denuncia cual fue la labor de pesca, en qué momento fue realizada, o cuales son circunstancias de la misma y menos refiere el producto capturado por la tripulación a bordo de la embarcación al momento de la fiscalización, con tal falta de precisión no podría prosperar la denuncia. Pues si se indica que se ha producido faena de



pesca, deben darse las precisiones del caso, pues de lo contrario mal se puede dar por concurrente elementos propios del pretendido tipo infraccional denunciado.

No son efectivos los hechos referidos en la denuncia y la misma carece de fundamentos, pues no basta pretender ampararse en una presunción legal, sin dar precisiones con respecto a la conducta imputada. En efecto, la denuncia señala que funcionarios habrían concluido que la embarcación de propiedad del armador, realizaba faenas extractivas de pesca, sin señalar las circunstancias ni la forma en que se sorprendió a la embarcación, limitando así las posibilidades de defensa de esta parte.

El funcionario denunciante no utilizó procedimiento alguno para establecer lo que afirma en su denuncia en relación al hecho de realizar su parte faenas extractivas pesqueras, no se señala de qué forma se llevado a cabo la supuesta faena de pesca extractiva. En razón de ello, la denuncia no goza de la presunción de veracidad, y la institución denunciante no puede ampararse en ella debiendo acreditar todos y cada uno de los supuestos referidos en su denuncia.

Hace presente que nos encontramos en el campo de lo infraccional, es decir, de responsabilidad a la cual se hacen aplicables los principios y normas que rigen al derecho sancionador o derecho penal. Que el principio de la tipicidad no es ajeno a esta materia, y por ende para que una conducta sea considerada como falta debe suponer que la misma debe estar descrita por el legislador como tal, y adicionalmente se requiere que sea típica la conducta a sancionar, esto es, que los hechos se adecuen a la conducta prevista por el legislador. Que en el caso que nos ocupa, es dable destacar que la infracción se configura en mérito de una interpretación de la institución sancionadora, y no por prever expresamente el legislador aquella conducta como transgresora de la normativa pesquera.

En efecto, el artículo 116, artículo fundante de la supuesta infracción imputada, se limita a señalar que se sancionan, de la forma que indica, las infracciones a la ley de pesca y a sus reglamentos o a las medidas de administración que no tuvieran señaladas una sanción especial. Pero lo cierto es que el desplegar una actividad colaborativa por parte de tripulantes, no configura infracción alguna a la ley de pesca, y ello es solo una interpretación del Servicio denunciante. De hecho debe colacionar diversas normas para establecer que lo refiere en la denuncia, para arribar a la conclusión, ello en razón de contenerse un mandato o una prohibición clara que haya sido infringida por el denunciado.

Que no se ajusta la norma a la conducta pretendida por cuanto su parte, pues no ha realizado a título personal actividad extractiva alguna, por lo que mal se le podría sancionar en base a tal transgresión. Es por todo lo dicho, y en especial, teniendo a las máximas



de experiencia de nuestro lado, es que la sola interpretación del denunciante y de antecedentes rendidos, no son suficientes ni idóneos para los fines pretendidos por el denunciante.

En subsidio, solicita la absolución en mérito de los antecedentes que se reseñan.

Para el evento de estimar que la conducta atribuida si es sancionable, solicita la absolución de toda pena, en razón de que sin perjuicio de los fundamentos reseñados en relación a lo no concurrencia de la infracción y la falta de configuración del tipo infraccional, destaca que el servicio no cuestionó al armador, ello no trajo ninguna consecuencia negativa para la institución, otro organismo de fiscalización, ni para la actividad, pues se trataría de una captura, que no supuso perjuicio alguno, pues no se le imputa haber capturado en exceso de la cuota de captura que le corresponde a la nave, sino una mera infracción formal.

Que, con los antecedentes reseñados, no es posible infringir los bienes jurídicos resguardados por la normativa pesquera.

Suma a lo anterior, que se si produce la situación descrita en orden a no existir lesión de los bienes jurídicos, ello lleva necesariamente a rechazar la denuncia por no existir afectación de los bienes jurídicos protegidos por la normativa pesquera.

En efecto, la Ley General de Pesca y Acuicultura se sustenta en la idea de amparar los recursos hidrobiológicos y el medio ambiente. De esta forma el artículo 1 B expresa que el objetivo de la ley "es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en si la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos.". Diversas normas contenidas en el Título IX de la ley se dirigen en el mismo sentido. Así, el artículo 108, letra a) dispone que, a la hora de determinar el monto de las multas, el juez tomará "especial consideración el daño producido a los recursos hidrobiológicos y al medio ambiente.".

Igualmente, el inciso final del artículo 118 bis establece una circunstancia agravante y un incremento de la sanción de multa para el caso que describe, si por ello se "causare daño al medio ambiente acuático o a otras especies hidrobiológicas.". Finalmente, el artículo 136 contempla el caso en que con motivo de una infracción de genere "daño a los recursos hidrobiológicos."

De esta manera, las reglas legales citadas dan cuenta con claridad que el objeto de la ley dentro de la cual se enmarcó el procedimiento sancionatorio, consiste en el resguardo y amparo de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Siendo ello así, al momento de decidir si un comportamiento merece o no un reproche punitivo por parte del Estado,



este se encuentra en la obligación de definir si a consecuencia de dicha conducta hubo o no una afectación al bien jurídico resguardado por la ley;

En la especie, se trata de determinar si producto la falta imputada, se había verificado efectivamente el perjuicio sobre los recursos hidrobiológicos. Pues bien, con ocasión de la conducta del denunciado no se materializó ningún detrimento, perjuicio o menoscabo sobre las especies hidrobiológicas capturadas, ni, menos, sobre el ecosistema.

Lo anterior, debido a que no se cuestiona el hecho de que armador habilitado habría excedido su posibilidad de captura en base a cuota asignada. Si hubo captura y la misma no fue cuestionada significa que no hubo afectación de los recursos hidrobiológicos, pues no extrajo más de lo que se encontraba habilitado. Así entonces, se desvirtúa todo el fundamento de la responsabilidad atribuida, toda vez que no ha habido afectación de los recursos hidrobiológicos ni al ecosistema.

Que uno de los elementos centrales que forman parte de la responsabilidad dice relación con la culpa o dolo que debe inspirar y concurrir en la conducta del sujeto a quien se le imputa un hecho infraccional. En ese sentido, alega su inexistencia debiendo tal circunstancia ser acreditada por el denunciante.

Que si bien la ausencia o no de daño no forma parte del tipo infraccional; pero debiese ser parte constituyente de la decisión si se piensa en el objeto jurídico protegido de la LGPA y en que, si se acredita inexistencia de perjuicio sobre el mismo, el reproche de culpabilidad no puede configurarse.

En subsidio, solicita la aplicación de la pena menos rigurosa en mérito de los antecedentes anteriormente reseñados.

Para el evento de estimar procedente una sanción, solicita la aplicación de la pena más baja que contempla el ordenamiento, en mérito de los fundamentos vertidos en los puntos precedentes, los que se dan aquí por expresamente reproducidos.

En folio 23 se recibió la causa a prueba.

En folio 47 se citó a las partes oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en folio 1 consta denuncia del SERNAP en contra de José Nieves Rivas Bustos, por haber sido sorprendido ejecutando labores de pesca artesanal - 12 de abril de 2021, alrededor de las 16:00 horas, en embarcación artesanal "Niña Ximena" en el sector de caleta Quiane- sin estar inscrito en el Registro Pesquero Artesanal de esta XV Región, lo que importa infracción a la normativa pesquera vigente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

SEGUNDO: Que el Decreto N° 635 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, de 17.02.92, creó el Registro Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Ley de Pesca y Acuicultura, para ejercer actividades pesqueras extractivas los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán previamente inscribirse en el Registro Artesanal que llevará el Servicio, so pena de la aplicación de una sanción pecuniaria. Se inscribirán en el Registro Artesanal las solicitudes de inscripción que recaigan sobre las pesquerías que se encuentran incorporadas en una nómina que determinará la Subsecretaría por región como una forma de regular el régimen de acceso y atribuciones para la conservación de los recursos hidrobiológicos tal como resulta del Título IV párrafo 1° del Decreto 430, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura.

TERCERO: Que es un hecho de la causa haber sido sorprendido el denunciado en la embarcación artesanal “Niña Ximena”, en Caleta Quiane, con fecha 12 de abril de 2021.

Que consenso existe en orden a estar inscrito el denunciado en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales, concordante en folio 1 acompañó la denunciante certificado de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal del antes citado en la oficina de SERNAP correspondiente a la VIII Región, Coronel.

CUARTO: Que, asentado lo anterior, y teniendo en consideración que según resulta de la interpretación sistemática –artículo 22 del Código Civil- de lo dispuesto en los artículos 50, 50 A y 51 de la Ley de Pesca, que la inscripción de un pescador artesanal en el antes citado registro es habilitante para ejercer las labores de la especie sólo en la región respectiva. Así el artículo 50 establece que para ejercer actividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales deberán previamente inscribirse en el registro artesanal que llevara el servicio, inscribiéndose en el mismo -artículo 50-A- las solicitudes que recaigan sobre las pesquerías que se encuentran incorporadas en una nómina que determinará la Subsecretaría por región. Que para inscribirse en el Registro Artesanal -artículo 51- se deberán cumplir entre otros requisitos, los siguientes, c).- acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base en la cual se solicita la inscripción y no encontrarse inscrito en nuestra regiones en el registro artesanal, y d).- acreditar residencia efectiva que al menos tres años consecutivos en la región respectiva. Por último, el citado artículo 50 inciso quinto, establece que en forma excepcional se podrá extender el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua en los casos y con los requisitos que la misma se establece.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, y teniendo presente que tal como lo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH

señala el denunciado la infracción del caso se trata de una meramente formal, en cuanto sin perjuicio de ser parte del Registro Nacional de Pecadores Artesanales de la VIII región ello no lo habilita para efectuar labores de pesca artesanal en la XV región del país, se configura la infracción del caso habida consideración de, teniendo presente lo señalado en el considerando tercero, no fue acreditado por su parte haberse desempeñado en labores distintas a las extractivas en la embarcación “Niña Ximena” a la fecha de ser fiscalizado por el SERNAP. Concordante, dispone el numeral 1).- del artículo 125 de la Ley N° 18.892, de Pesca y Acuicultura, que una denuncia como la de la especie constituye presunción de haberse cometido la infracción denunciada, probanza que en todo caso no fue desvirtuada en forma pertinente y suficiente alguna, por lo que concluye este sentenciador –acorde las reglas de la sana crítica- que efectivamente el denunciado incurrió en la infracción por la cual en el presente se le persigue, razón por la que se dictará la sentencia condenatoria en su contra.

Por las anteriores consideraciones, y vistos además lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 125 de la Ley de Pesca, se declara:

I.- Que se CONDENA al denunciado JOSÉ NIEVES RIVAS BUSTOS, CI. N° 06.335.482-1, ya mayormente individualizado, a pagar una multa equivalente a 03 (tres) unidades tributarias mensuales (UTM.), bajo apercibimiento legal específico, en su calidad de responsable de la falta prevista y sancionada en los artículos 50 A y 116, respectivamente, de la Ley de Pesca y Acuicultura en relación con el Decreto Supremo N° 430, de 1991, sorprendida en el litoral de esta ciudad con fecha 12 de abril de 2021.

II.- Que la multa aplicada al denunciado deberá ser pagada por éste en Tesorería Comunal de esta ciudad dentro del plazo de 10 días de ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese, notifíquese y archívese si no se apelare.

Rol N° 1849-2021-CIV.-

Dictada por don Julio Boris Aguilar Bustamante, Juez Titular del Tercer Juzgado de Letras de Arica.

NOTIFICACION ESTADO DIARIO.

En Arica, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario de hoy la resolución que antecede.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXQVXDDYDYH